



Antiguos y nuevos sentidos de la política y la violencia

Por Pilar Calveiro

Toda memoria tiene sus puntos ciegos y sus imposibilidades. Con esta premisa y con rigor analítico, Pilar Calveiro reflexiona críticamente sobre política, violencia y autoritarismo en los años setenta. Y propone diez hipótesis para la controversia.

“La gratitud por la vida que nos han dado –una vida que apreciamos incluso en el sufrimiento- ... es la fuente de la memoria” (Arendt en Berlanga: 140)

Un par de palabras iniciales

Mientras escribo este texto en México, me llega la noticia de la identificación de los restos de Alcira Campiglia, la Pili, mi cuñada, compañera y amiga queridísima, desaparecida en 1977, como consecuencia del terrorismo de Estado y también de una forma particular que teníamos en los años setenta de entender la relación entre política y violencia. Por respeto a ella y a todos los que quedaron en ese camino, creo que es responsabilidad de nosotros, los que todavía tenemos prestado un poco de vida, volver a pensar con seriedad, con dignidad y, en la medida de lo posible, con inteligencia aquella historia que interrumpió sus vidas en medio de una apuesta tan alta.

Memorias de una identidad

Este encuentro ha sido convocado para reflexionar sobre la conjunción de dos fenómenos que conceptualizamos como memoria y como identidad. Nos remite, pues, a pensar quiénes fuimos y quiénes somos o, más bien, quiénes creemos que fuimos y somos.

No se trata de una cuestión sencilla, sobre todo si consideramos que ambos fenómenos son múltiples; me explico: no podemos hablar de una memoria, en sentido singular, sino de me-

morias siempre plurales, diversas y contradictorias como tampoco podemos hablar de una identidad sino de diferentes identidades que se superponen ya sea en una persona, un grupo social o una nación. Así pues, ¿a qué memoria y a qué identidad podría referirme?

Voy a intentar realizar un ejercicio de memoria sobre los años setenta a partir de una identidad específica, la identidad política; es decir, voy a tratar de hacer un ejercicio de memoria política muy preliminar, muy incipiente y, espero que muy discutible, en el sentido más amplio del término. Elijo este ángulo particular porque estoy convencida de que la dictadura, la desaparición de personas y la violencia -estatal y no estatal- de los años setenta fueron fenómenos en primer lugar políticos que, por lo mismo, reclaman ser descifrados igualmente en clave política.

Hablo de un ejercicio de memoria, y no de una historia del problema, de manera intencional. Existen numerosas vinculaciones entre memoria e historia e incluso se podría decir que, en muchos casos, esta última es una forma de memoria social. Sin embargo, para hacer una historia del problema se requeriría, por lo menos, la incorporación de otros elementos y perspectivas que no serán parte de este análisis.

Memoria e historia se construyen, ambas, desde las interrogantes y las necesidades del presente, pero la primera tiene un distintivo singular: "llama", "despierta", reorganiza lo vivido, aquello experimentado directamente desde y con el cuerpo. La memoria arranca de una inscripción hecha en el cuerpo individual o social, de una "marca" que, incluso desapareciendo de la superficie, permanece allí como una especie de conector y desconector de la memoria. Puede ser una cicatriz o sencillamente una "lastimadura no específica" (Actis: 81), difusa, pero de la que se conoce perfectamente su localización. Lo vivido por el cuerpo "remite" a la memoria de manera directa, incluso como "alucinación" aparente; "recrea" situaciones en principio distantes y puede "confundir" al médico que opera para sanar, en el presente, con el torturador que operó para desmembrar, en el pasado, como lo relatan Gardella o Actis (Actis: 70); sin embargo tal memoria no es engañosa sino estrictamente fiel: lo que en realidad hace es resistirse a que otros "operen" sobre el propio cuerpo.

Por eso son las "marcas" que llevamos en nosotros, en nuestras sociedades, las que convocan a la memoria. De manera que todo acto de memoria debe reconocer este punto de arranque de lo experimentado, sin pretensión de una objetividad o una completud imposibles en él. Debe reconocer su "marca", más o menos visible, como el lugar desde el que reconstruye esa memoria. En caso contrario, se contrabandea un recuerdo, siempre parcial, como si fuera un relato histórico con pretensiones de generalidad; o bien, se desconoce la experiencia y se construye un relato "esquizofrénico" que no reconoce continuidad alguna con lo vivido. Ocurre, con cierta frecuencia, una especie de "travestismo" del discurso, que pasa de haber expresado en el pasado el más radical militarismo a una verborrea democrática en el presente, que

se reconoce rápidamente como falsa, o que tiene la virulencia siempre sospechosa de los “conversos”. Periodistas, políticos, académicos traslapados por arte de magia a un discurso liberal del todo ajeno a sus prácticas antiguas y actuales, travestis que no pueden o no quieren dar cuenta de una experiencia difícil, contradictoria, y de sus significados. Se podría afirmar incluso que cualquier reflexión, para que sea “verdadera”, debe dar cuenta de lo vivido y sus sentidos; si se extravían los sentidos del pasado, difícilmente se encontrarán los del presente.

Hay pues una delimitación en los ejercicios de memoria que tiene que ver con la explicitación del lugar desde el que se habla, de lo vivido y sus marcas. En este caso, mi intento por realizar una memoria política de los años setenta tiene como referencia mi experiencia particular en el ámbito de lo que se caracterizaba entonces como “militancia revolucionaria”, dentro de un grupo armado, Montoneros, y desde una identidad política específica, la peronista.

Se trata por supuesto de una experiencia que, siendo individual, fue asimismo compartida, de manera que en esta reconstrucción “memoriosa” me voy a valer de otras voces, generalmente más agudas o inspiradas que la mía pero que recogen experiencias comunes.

En primer lugar, creo que es importante despejar un malentendido. Cuando se habla de memoria se suele restringir la peculiaridad de la experiencia a una especie de relato sensible, incluso sensiblero, poco elaborado y encerrado en una historia individual, casi autónoma de lo social.

En oposición a esta idea, considero que la memoria no implica la suspensión de la racionalidad analítica, ni mucho menos la complejidad del análisis. Asimismo, propongo revisar la supuesta autonomía del sujeto moderno, para pensar en una heteronomía que nos implica a unos en relación con los otros, y según la cual, toda experiencia individual, siendo única, no sólo se inscribe fuertemente en parámetros y códigos de significación colectivos, sino que se hace con otros, gracias a otros, iluminada o cegada por esos otros.

El lazo que une a la memoria con la experiencia no hace de ella algo secundario, al contrario, la experiencia es el sustento mismo de todo conocimiento. La ciencia y la teoría son realidades de segundo orden, se derivan de la experiencia, y su forma de construcción no tiene primacía alguna con respecto del conocimiento que proviene de la vida ordinaria. Esto “vivido” es una realidad participada, dentro de un mundo en común, pero ello no le confiere el carácter de “evidencia inapelable” sino que reclama, desde las distintas vivencias, del uso de la razón, el pensamiento, la argumentación y el análisis.

Partiendo de la experiencia, realiza una cierta separación de ella para tratar de entenderla. Como dice Hannah Arendt: “creo que entendí algo acerca de la acción porque la contemplé, más o menos, desde fuera” (Arendt en Berlanga: 120). Esta cierta distancia, que no prescinde de lo vivido, también implica ir más allá de lo estrictamente personal y de lo que parece evidente.

Aun así, toda memoria tiene sus puntos ciegos, sus imposibilidades, lo que no puede o no quiere ver –es difícil establecer la diferencia-, independientemente de que lo reconozca o no. Más allá de la voluntad, hay una imposibilidad humana de ver o aceptar la totalidad. Por ello, ésta como cualquier otra memoria debe reconocerse sólo como una voz entre otras, la apertura de una serie de interrogaciones, una mirada particular que busca encontrar contrapuntos, no ecos. Una vez más, al decir de Arendt, “el mundo sólo surge cuando hay diversas perspectivas” (Arendt en Berlanga: 134). Es necesario dar lugar a figuras diferentes que se construyen desde miradas de actores distintos, pero también desde momentos que reclaman de nosotros diferentes preguntas. Es en ese sentido que creo importante colocar parte del foco del análisis en la difícil relación entre política y violencia, ya que se trata de un problema clave en las marcas de nuestro pasado y que, al mismo tiempo, considero nodal para desenredar algunos de los hilos del presente.

Memorias, ¿para qué?

Silvana Rabinovich, filósofa argentina que tiene una reflexión interesantísima sobre la memoria, desarrolla una idea de Tadié según la cual la memoria sería un sexto “sentido”, aquel que es capaz de proveer de sentido a los otros cinco. La ubica así en el campo de lo estrictamente físico, lo que de por sí resulta interesante y resuena con lo planteado aquí sobre la marca, como inscripción en el cuerpo y como “disparadora” de la memoria, pero va más allá.

Desde ese punto de vista, hacer una memoria política tendría el objeto de recuperar los sentidos de aquella práctica, la de los años setenta, y su relación con la violencia en las circunstancias en las que se desencadenó. Pero también implicaría explorar en qué sentido aquella experiencia reverbera en el presente y las urgencias actuales. En otros términos, se trataría de encontrar los “puentes de sentido” que vinculan aquella forma de entender la política y la violencia con las prácticas actuales, para iluminar una con la otra, para descifrar el pasado desde miradas renovadas por una experiencia más amplia pero también para decodificar el presente desde la distinción, que permite afirmarlo como otro a la vez que reconoce las posibles conexiones.

La pérdida de la memoria, en este caso de la memoria política, se vincula con la pérdida de sentido de la política misma, de su vitalidad. Hoy es como si hacer política se hubiera convertido en actuar un guión preestablecido y pobre, en representar personajes prefigurados por los medios, gastados, seres tristes en lugar de actores de verdad, capaces de crear, de inventar y de apostar -reconociendo que éstos siempre han sido escasos-. En este sentido, así como la memoria pugnó por la “reaparición” de los desaparecidos, exigiendo su inscripción en la historia, en la sociedad y en el derecho, la memoria política podría apostar a hacer reaparecer a la política, extraviada desde hace demasiado tiempo; una política en el sentido fuerte y resistente del término, como desafío para inventar un mundo común.

Asimismo, creo que la memoria política es también una forma de tomar responsabilidad, esto es de responder por la práctica desarrollada hasta donde se puede hacer: tratar de entenderla y explicarla con sus propias coordenadas de sentido, en primer lugar, para someterla a una crítica razonada, con todo lo que esto implica.

Creo que es importante que pongamos la experiencia común sobre la mesa, no para descuartizarla o diseccionarla, sino para presentarla ante los otros, para analizarla con los otros, para ofrecerla como posible “iluminación” del pasado y el presente, que nos permita pasar más allá de la “marca” del dolor. Se trataría, en otros términos, de recordar la experiencia política desde la política; de conectar lo que fuimos con lo que somos, las identidades del pasado con las del presente para poner ambas en tensión y en entredicho y recuperar, o tal vez aprender, la esperanza.

Por último, creo que se podría afirmar que memoria llama memoria. Todo acto de memoria convoca a otros que lo convalidan, lo cuestionan o lo desmienten, y de eso precisamente se trata. Es importante volver a reflexionar sobre la práctica política que fue, sin desecharla y sin idealizarla –que es otra forma de desecharla, políticamente hablando-. La reflexión que presento a continuación es preliminar. Son los primeros pasos dentro de un terreno aún brumoso pero el sentido de la memoria política es aportar al cauce de las apuestas del presente y el futuro, sin pretender que podríamos desconocer las experiencias que llevamos inscritas como sujetos y como sociedad.

Dado que me voy a referir a procesos generales, que reconstruyo a partir de otros contemporáneos-convivientes, voy a hacer el análisis de la relación ente violencia y política en tercera persona, pero creo oportuno señalar que me considero implicada en esta tercera persona, sobre todo en lo que se refiere a Argentina. Es importante reiterar esta implicación porque comprende el reconocimiento de responsabilidades en los acontecimientos a los que me refiero y critico. Es decir que hablo como parte de -y no por fuera de- las prácticas violentas que trato de analizar. Hechas estas aclaraciones, arrancamos.

Para comprender las coordenadas de la política argentina de los años setenta es imperioso situarla en relación con un contexto mundial que organizó, política y simbólicamente, parte de los enfrentamientos.

Cuando se habla del siglo XX, el “más terrible de la historia occidental”, según Isaiah Berlin, por la gran cantidad de matanzas, guerras, genocidios, la palabra clave es guerra. Creo que se podría hacer la historia del corto siglo XX, como lo propone Eric Hobsbawm, a partir de la historia de las guerras: 1. Primera Guerra Mundial (guerra masiva, como la llamó Hobsbawm), 2. Entreguerras -según una clasificación frecuentemente utilizada-, periodo en el que ocurre nada menos que el ascenso de los totalitarismos en preparación de la siguiente confrontación bélica, 3. Segunda Guerra Mundial, caracterizada como guerra total, por la escalada del exterminio, 4. Guerra Fría y organización de un mundo bipolar, hasta la caída de la Unión Soviética en 1991.

A lo largo de todo el siglo XX se libró una prolongada lucha para fijar la hegemonía planetaria, global. Fue una guerra en escalada, con costos humanos cada vez más altos, sobre todo en relación con la población civil. La Primera Guerra produjo 10 millones de muertos, entre víctimas militares y civiles; la segunda 54 millones y la Guerra Fría, no tan fría, ocasionó más de cien enfrentamientos locales en la periferia, que costaron entre 19 y 20 millones de vidas humanas, casi todas ubicadas en el llamado Tercer Mundo. (Hobsbawm: 433).

Así pues, la Guerra Fría, dentro de la que se inscribió nuestra “guerra sucia”, no fue un periodo de pacificación sino de desplazamiento del conflicto y de sus costos, de los países centrales hacia los países del entonces llamado Tercer Mundo. Dado el desarrollo de la tecnología nuclear, un posible enfrentamiento de las potencias entre sí hubiera implicado la destrucción del mundo mismo, por ello se lo dividió en dos campos enfrentados y en disputa, un mundo bipolar, a pesar de todos los esfuerzos terceristas.

En los años setenta, la bipolaridad comprendía la lucha entre dos modelos de hegemonía con pretensiones igualmente mundiales: el capitalista y el socialista, que se asumían no como ad-

versarios sino como enemigos antagónicos. Ambos tenían rasgos extraordinariamente comunes: ponían el acento en la determinación de lo económico y en la centralidad del Estado. El sistema soviético se vio atrapado por estos dos principios. Sin embargo, el capitalismo traía dos ases en la manga. El primero, una radicalización de la determinación de lo económico sobre lo político que no sólo no confesaba sino que le endilgaba a su enemigo. El segundo, una defensa del Estado de Bienestar que adivinaba desde entonces la necesidad de su aniquilación, por lo menos en la versión de Estado social vigente en aquel momento. De hecho, un movimiento implicaba al otro. Para mantener la viabilidad económica del sistema, el capitalismo supo desde los años setenta que debía usar al Estado como instrumento de su propia aniquilación, tarea que ensayó en América Latina desde los setenta y que emprendió en los países centrales a partir de los primeros ochenta. El control planetario pasaba por el control del mercado, pero éste debía ser garantizado por Estados hasta cierto punto “kamikazes”.

En síntesis, las lógicas de ambos antagonistas, que permearon la organización mundial de las relaciones de poder, en primer lugar, eran económicas y estadocéntricas; su racionalidad era binaria y su forma de expansión y de defensa, la guerra.

América Latina y los proyectos revolucionarios

La expresión latinoamericana de la Guerra Fría fueron las llamadas guerras sucias, es decir la desaparición de personas, involucradas en proyectos políticos alternativos, armados y no armados, como parte de una política de Estado. En este contexto se inscribieron tanto el Plan Cóndor, en los años setenta, como las guerras en Centroamérica, en particular Guatemala y Nicaragua, durante los ochenta.

Como es bien sabido, en la distribución bipolar del mundo, América Latina “pertenecía” al Occidente capitalista, con la excepción de Cuba. La lucha de los antagonistas globales implicaba la defensa de los territorios controlados, de manera que Estados Unidos no podía permitir la pérdida de control sobre el continente americano, envuelto en una serie de movimientos sociales y políticos más o menos radicales. El control de América Latina dentro del capitalismo occidental fue una precondition para conquistar la hegemonía planetaria.

Se instrumentó entonces la tan conocida política de seguridad nacional, que remitía cualquier conflicto nacional a la confrontación global entre capitalismo y socialismo. Se la aplicó en todos

los países a través de los aparatos represivos del Estado, apoyados por los servicios de inteligencia norteamericanos.

La organización bipolar del mundo se “clonó” hacia dentro de las fronteras nacionales y estructuró la lucha política en campos separados y enemigos. Por una parte, los Estados, en la defensa del statu quo occidental y por otra un sinnúmero de organizaciones, partidos de izquierda y movimientos que pugnaban por modelos alternativos, genéricamente definidos como socialistas, de corte nacional popular y que se planteaban adueñarse del aparato del Estado para establecer un orden nuevo, mediante un proceso revolucionario.

Si la palabra clave del escenario internacional fue la guerra, la palabra clave de la política latinoamericana fue revolución; pero también aquí los antagonistas giraban en torno al control del Estado, reproduciendo la visión estadocéntrica predominante en el terreno internacional.

La idea de la Revolución, así, con mayúsculas, se ha ido expulsando del imaginario político. Sin embargo, en los años setenta era parte nodal de la propuesta de la mayor parte de los grupos disidentes. Hacer la revolución era tomar el aparato del Estado para abrir un proyecto que prometía ser radicalmente nuevo, nacional, antiimperialista y, en consecuencia, de ruptura con el orden capitalista. Un proyecto que prometía transformar las relaciones del espacio público y privado y crear un hombre nuevo: una especie de milagro. Esa gran revolución convocaba, en primer lugar, a la acción.

El tema de la acción se ha malinterpretado con frecuencia. El énfasis en ella no implica, necesariamente, la falta de teoría ni mucho menos de racionalidad o reflexión. Por el contrario, tanto la acción como el discurso son inseparables de la política. Decía Hannah Arendt, de indiscutible filiación republicana, en un texto que se tradujo al español precisamente en los años setenta: “Dejados sin control, los asuntos humanos no pueden más que seguir la ley de la mortalidad... La facultad de la acción es la que interfiere en esta ley... El lapso de vida del hombre en su carrera hacia la muerte llevaría inevitablemente a todo lo humano a la ruina y la destrucción si no fuera por la facultad de interrumpirlo y comenzar algo nuevo, facultad que es inherente a la acción... La acción es la única facultad humana de hacer milagros, como Jesús de Nazaret... el nacimiento de nuevos hombres y de un nuevo comienzo es la acción... Sólo la plena experiencia de esta capacidad puede conferir a los asuntos humanos fe y esperanza” (Arendt: 265-266). Este nacimiento, este nuevo comienzo era la natalidad y la Revolución.

La idea de Revolución, incluso en Arendt cuyo pensamiento fue relativamente ajeno a las izquierdas latinoamericanas, vinculaba la acción con una visión bastante pragmática. En su texto sobre Rosa Luxemburgo decía “la organización de la acción revolucionaria puede y debe

aprenderse en la acción misma” (Arendt en Berlanga: 67). También la centralidad de la voluntad, del querer como prerrequisito de la acción transformadora, que llega a impacientarse frente a la parálisis temporal del pensamiento, son ideas de filiación arendtiana, que estaban presentes en el debate y en el imaginario de los años setenta, incluso fuera del ámbito de reflexión marxista.

La concepción revolucionaria se acompañaba de la reivindicación de la figura del héroe, como sujeto que actúa y habla, que arriesga la seguridad personal, incluso su vida por un interés que no es privado sino público, político; alguien que es capaz de asumir un peligro, de hacer algo extraordinario, único, por otros, dejando constancia de su acto y alcanzando así cierta inmortalidad.

En América Latina, el común denominador de las sociedades era la pobreza y la exclusión, en países gobernados por dictaduras tradicionales, militares e incluso dinásticas, con algunos ejemplos de democracias extraordinariamente restringidas, como la mexicana, amparadas unas y otras por la política norteamericana. En ese contexto, la izquierda no dudaba de la necesidad de realizar un cambio revolucionario, que fundara un orden por completo nuevo, bajo el mandato de que “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”. Y esta consigna, aparentemente tautológica, tenía un sentido y unos destinatarios precisos. Contra la idea de la izquierda tradicional, y especialmente de los partidos comunistas, sobre la existencia de unas “leyes de la historia” que requerían el cumplimiento de determinadas condiciones económicas, materiales, objetivas, como condición de posibilidad para que se diera una transformación revolucionaria, nuevos grupos de la izquierda planteaban la posibilidad de crear esas condiciones mediante la acción política. Se cuestionaba así la determinación de lo económico, la fatalidad de la historia, a la vez que se evidenciaba una cierta impaciencia por el debate interminable sobre las condiciones objetivas y subjetivas y se apelaba a la acción directa para contribuir a crearlas.

Sin embargo, esta acción que se abría paso como una nueva opción de lucha política, tenía una diferencia sustancial con la que había propuesto Arendt: se fincaba en el recurso a la violencia y tomaba como modelo a la Revolución Cubana, de la que seducía, sobre todo, su celeridad en la toma del poder del famoso Estado. Aunque con una política confrontativa, la fascinación por la acción, la premura y lo completamente nuevo estaban en perfecta sintonía con los valores de la Modernidad occidental que se cuestionaba.

La discusión en torno a la opción por la lucha armada se convirtió en la discusión política por excelencia, efectuando un desplazamiento clave de lo político por lo táctico, técnico, militar. Así, una militante de aquella época, entrevistada por Vera Carnovale, afirmaba: “Bueno, yo ya te conté, (que) la duda era entre el ERP y el peronismo (¡!). (porque) estaba de acuerdo con el tema de la lucha armada” (Carnovale: 7). Desde esta mirada, parece ser secundaria la opción

política nada menos que entre el peronismo y el trotskismo, en relación con una decisión que parecía ser la de fondo: la opción por la vía armada. Es que, en realidad, entre los diferentes grupos guerrilleros se daba por hecho un objetivo común y difuso, la construcción del socialismo, casi siempre pensado en una variante nacional más parecida al modelo cubano que a la de los países de Europa del Este, pero no se profundizaba en el proyecto de nación que se pretendía, más allá de la reafirmación antiimperialista y anticapitalista. De hecho, se postergaba la discusión de qué revolución se pretendía por el debate sobre cómo lograr tomar el aparato del Estado, llave mágica que abriría las puertas del cambio.

Inmediatamente se planteó otra discusión, igualmente metodológica, táctica y militar: de qué características debía ser esa lucha armada. Se debatió entonces en torno a los modelos insurreccional y guerrillero, en sus versiones rural y urbana; toda la izquierda, incluidos los partidos comunistas, se vio envuelta en estas discusiones. Como lo plantea Ana Guglielmucci, se había conformado un “arquetipo de formación político militar, que no fue un fenómeno político aislado, sino parte de un heterogéneo proceso político que se extendió alrededor del mundo entero entre 1950 y 1970” (Guglielmucci: 97).

Un texto clásico de la época, que tuvo enorme difusión y daba cuenta de parte de esta polémica y de sus argumentaciones fue *¿Revolución en la revolución?* de Régis Debray. Allí se resume el debate y ya se encuentran enunciadas, con una claridad meridiana, algunas de las grandes distorsiones que llevarían a la militarización y asfixia de lo político. Si bien Debray afirmaba, con un espíritu abiertamente gramsciano, que “toda línea militar depende de una línea política” (Debray: 124), también decía, pocas páginas más adelante: “Es ridículo continuar oponiendo ‘cuadros políticos’ y ‘cuadros militares’, ‘políticos puros’ —que quieren seguir siéndolo— no sirven para dirigir la lucha armada del pueblo; los ‘militares puros’ sirven, y dirigiendo una guerrilla, viviéndola, se convierten en ‘políticos’ también... en la guerra de guerrillas los combatientes se forman políticamente más pronto y más profundamente” (Debray: 143). Recogía en parte la experiencia que habían hecho los cubanos pero, enunciadas así las conclusiones, resultaba que, por una parte, se requería la unidad de lo militar y lo político pero lo militar no se podía aprender desde lo político aunque sí lo político desde lo militar. De esto se desprendía, de manera evidente, la primacía de lo militar sobre lo político.

En general podría afirmarse que existió un desplazamiento de la discusión de qué se buscaba por cómo lograrlo, pero tampoco el cómo se pudo abordar desde una perspectiva política. Si se piensa, con Gramsci, que la hegemonía, es decir la validación social de un proyecto político, económico, moral, se alcanza justo antes de la toma del poder y gracias a la aceptación de ese proyecto por la mayor parte de la sociedad, en el caso de la discusión sobre la lucha armada en América Latina no sólo se perseguía un modelo extraordinariamente difuso sino que la discusión por los métodos desplazaba el cómo lograr los consensos, las alianzas y los acuerdos, políticamente hablando.

Sin embargo, no se puede soslayar que el cómo, que en primera instancia parece ser un problema exclusivamente procedimental, encierra una discusión eminentemente política. Se trataba, ni más ni menos que de la conquista del Estado, disputándole el monopolio de la violencia legítima, para refundar otro Estado. El hecho de que ello se intentara mediante el uso de las armas no le arrebató la dimensión política al problema. En este sentido, se impone la referencia a un texto que se considera fundante de la política moderna, El Príncipe de Maquiavelo, en donde la mayor parte de la argumentación se refiere, precisamente, a cómo utilizar el poder militar para la constitución del Estado, lo cual no lo convierte en un texto sobre estrategia sino en un clásico de la política. De igual manera, los trabajos de Michel Foucault sobre la fundación de los Estados europeos muestran, con absoluta claridad, el papel de las armas y la violencia en la constitución de las instituciones políticas.

Además de su condición de llave para la refundación del Estado, el poder militar tenía una cualidad previa: amplificar la voz política. El texto de Debray lo formulaba así: “tener una guerrilla permite hablar en voz alta” (Debray: 140), afirmación que resultó cierta en la experiencia argentina y en la latinoamericana, incluso hasta fechas muy recientes. El movimiento indígena mexicano, por ejemplo, pudo hablar en “voz alta” a partir de la constitución del EZLN, como movimiento armado que ha tenido un uso verdaderamente singular y meditado de la violencia.

En realidad, estas dos cuestiones remiten al verdadero núcleo del problema: la internalidad de la violencia con respecto a la política. Planteada desde los orígenes de la Modernidad hace aparecer las “dos caras” de la política: amor y temor, consenso y coerción, discurso y violencia, como elementos no excluyentes.

En un texto fundamental para esta discusión, Walter Benjamin muestra a la violencia como elemento fundante no sólo del Estado sino del derecho que éste configura en torno suyo. “Fundación de derecho equivale a fundación de poder y es, por ende, un acto de manifestación inmediata de la violencia” (Benjamín: 40). En consecuencia, la legalidad no representa una suspensión de la violencia sino su consumación. Cuando el Estado se erige en detentador monopolístico de la violencia legítima no la cancela sino que se la apropia utilizándola para preservar el orden establecido. El uso de la violencia por otros actores políticos comporta el cuestionamiento de este monopolio, que puede ocurrir para la fundación de un nuevo orden y un nuevo derecho. Cuando es así, se podrían diferenciar dos violencias, simétricas en sus fines aunque no necesariamente en su potencia ni en sus formas de ejercicio: una violencia conservadora del derecho vigente, que instrumenta el Estado, y otra violencia fundadora de un nuevo orden y un nuevo derecho, que se pretenden más justos.

En síntesis, toda lucha política por la reorganización del poder del Estado y el derecho, en términos radicales, comprende simultáneamente a la violencia y al discurso. Esta fue la perspectiva que predominó en la decisión de las izquierdas de los años setenta para emprender una lucha armada. Se discutía el monopolio de la violencia del Estado como ilegítimo y se consideraba legítimo, por el contrario, el uso de la violencia para instaurar un nuevo orden, definido como más “justo”. Se oponían así la violencia estatal y la violencia revolucionaria bajo un lenguaje guerrero. Se hablaba de guerra antsubversiva, por un lado, y de guerra popular y prolongada, por el otro. No fueron ni una cosa ni otra. La “guerra popular y prolongada” no pasó de ser guerrilla urbana o rural, en algunos casos, y la “guerra antsubversiva” no fue más que una política represiva de estado basada en el terror.

Argentina: una larga historia de violencia y autoritarismo

En relación con las características que adoptó la violencia política en Argentina en la década de los setenta, me limitaré a presentar diez hipótesis de carácter general, como primera aproximación al problema.

1. La violencia política en Argentina es de larga data y se asienta en una estructura autoritaria, es decir, en una visión de oposiciones binarias y de lucha entre enemigos, presente en la vida política desde el siglo XIX y arraigada fuertemente en las prácticas sociales. Esta concepción se puede rastrear en nuestra historia desde la Campaña al Desierto, planeada para “despejar” las tierras fértiles eliminando indios, que ocurrió simultáneamente con la fundación del Estado. Las Fuerzas Armadas como núcleo del Estado impusieron a lo largo de todo el siglo, mediante los sucesivos golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) proyectos y formas de gobierno lesivas para las mayorías. No obstante, esta lógica guerrera e impositiva del aparato militar fue respaldada y reclamada por los más diversos sectores políticos, de manera que no hay partido político o grupo de poder en Argentina que –aunque en grados diferentes- no haya promovido o participado en la interrupción violenta del orden democrático para imponer proyectos de su propio interés. Asimismo, el uso de la violencia política creciente por parte del estado fue avalado de manera explícita o implícita, con el silencio, por amplísimos sectores de nuestra sociedad.

2. Las Fuerzas Armadas, es decir el núcleo del Estado, fueron un instrumento clave en la escalada de la violencia política de las últimas décadas. Si el gobierno peronista de los años cincuenta reprimió a su disidencia y la encarceló, en 1955 la Marina lo sobrepasó con creces bombardeando una plaza llena de civiles para derrocarlo. Si la Revolución Libertadora se inició

entonces, gracias a un golpe de Estado, un año después no dudó en fusilar a otros militares y civiles rebeldes porque intentaban deponerla, en un hecho sin precedente para la época. Si, durante el gobierno de Frondizi, la proscripción del peronismo y la cancelación de algunas de sus conquistas llevó a una resistencia obrera en ascenso y muchas veces violenta, las Fuerzas Armadas respondieron a la reorganización de los sectores populares tomando el poder, prohibiendo la política, reprimiendo el descontento, instaurando la práctica de la tortura sistemática e iniciando la desaparición de personas, a partir del golpe de 1966. Casi sobre el final de esa dictadura ocurrió en Trelew el fusilamiento de 16 prisioneros que habían intentado fugarse, acto de una violencia estatal también sin precedente. Por último, si se generaron movimientos armados que alteraron el orden público y atacaron a miembros de las corporaciones militares, éstas pasaron a crear campos de concentración-extermínio para desarrollar una política sistemática de desaparición de personas, no sólo de las organizaciones armadas sino de todo tipo de disidencia, con todas las secuelas que ya conocemos.

3. La lucha armada surgió como respuesta a una estructura de poder ilegítima, en un contexto de descrédito general de la democracia. Si bien existen antecedentes de organizaciones armadas desde 1962 e incluso desde 1959, los grupos guerrilleros que operaron en los setenta se originaron con posterioridad a la Revolución Argentina de 1966, que decretó el agotamiento y muerte de la democracia. Es importante señalar que fue desde el Estado que se desechó la democracia y se hizo con el apoyo “táctico” de Perón, del ala vandorista del sindicalismo, de amplios sectores del radicalismo, en especial la corriente intransigente, de la Confederación General Económica, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Iglesia Católica y los medios de comunicación; todos ellos coincidían en el agotamiento de una democracia que no había tenido oportunidad siquiera de nacer, entre golpes militares y proscripción de las mayorías. Si para los grupos dominantes, la democracia era un imposible sencillamente porque no tenían consenso, es importante señalar que tampoco gozaba de gran prestigio en el resto de la sociedad: para el movimiento peronista, representaba la bandera poco creíble esgrimida por los golpistas y represores de 1955 y para la izquierda en general, correspondía a una visión “liberal”, teóricamente “superada” por la propuesta socialista y las llamadas “democracias populares”. Así, todos coincidían en su cancelación, aunque por motivos diversos, pero el golpe de gracia institucional provino del propio Estado.

Los militares, ante la imposibilidad de obtener el apoyo popular que presuponen las democracias, impusieron un nuevo modelo de tipo corporativo y una sociedad más disciplinada para establecerlo. “La ideología de la Revolución Argentina significó la proyección sobre el Estado y la sociedad de los valores de la gran institución burocrática que es el ejército profesional” (Rouquié: 266). La disciplina social fue el resorte para instaurar un modelo económico de desarrollo industrial basado en la apertura al capital extranjero y en la reducción de los salarios y los derechos laborales. Los militares se lanzaron a la reorganización de la sociedad, prohibieron la política y se entrometieron en la vida privada estableciendo desde el largo permitido de las faldas hasta el de las barbas. Poco a poco se fueron gestando movimientos de oposición en el ámbito sindical, estudiantil y otros, que desembocaron en grandes movilizaciones de protesta,

de corte insurreccional y violento, como el cordobazo, y que alimentaron a los grupos armados en formación. La política, desaparecida por decreto, reaparecía a pedradas y tiros. El general Onganía, antes de retirarse, instauró la pena de muerte, que nunca se aplicó, pero que preanunciaba la escalada de violencia. Fue en este contexto que se dio la aparición de los grupos guerrilleros que operaron principalmente en los años setenta: FAP en 1968 con una guerrilla rural que no prosperó, Montoneros en mayo de 1970 con el asesinato del general Aramburu, FAR en julio de ese año con la toma de la localidad de Garín, mismo mes y año en que se dio la constitución formal del ERP y la primer operación pública de las FAL.

El hecho de que la llamada Revolución Argentina fuera un gobierno de facto, sin legitimidad formal alguna, alentó la idea de que disputarle el monopolio de la violencia era un hecho políticamente aceptable. La crisis económica, la agitación social y la cerrazón política promovieron un nivel creciente de violencia y el accionar de una guerrilla activa, con escasos vínculos con la estructura política formal pero con un considerable grado de simpatía y aceptación por parte de diferentes sectores.

4. La vinculación de los grupos armados con el movimiento peronista les permitió salir del aislamiento “foquista”, entrar al juego propiamente político y experimentar una expansión y un arraigo poco frecuentes en los grupos armados. El reconocimiento de la guerrilla como una “juventud maravillosa”, por parte del general Perón, le abrió el acceso a un movimiento de masas, amplio, vital y contradictorio; apenas entonces los grupos armados peronistas –en particular FAR y Montoneros- probaron las mieles de la política, el contacto abierto con los sectores de base de un movimiento amplio, la movilización callejera legal y multitudinaria. Tal vez esta inserción dentro de un movimiento de gran arraigo popular fue la peculiaridad de las organizaciones armadas argentinas que les permitió vincularse bastante estrechamente con sectores sociales importantes y numerosos.

5. El peronismo fue, a la vez, la puerta de acceso a la política, la prueba de fuego y la trampa mortal. Si la declaratoria de “juventud maravillosa” y la participación en la campaña electoral de 1973 fueron una gigantesca puerta de acceso al movimiento peronista, ello también implicó la entrada a un universo extraordinariamente complejo y opaco. La diversidad de grupos internos, los conflictos y la forma de resolverlos, siendo brutales y violentos, no se remitían a una lógica simple, frontal, de amigo-enemigo sino que reclamaban de las astucias de la alianza, la simulación, la paciencia, la traición; en este sentido, la pertenencia al movimiento fue una verdadera “prueba de fuego” política, que las organizaciones no superaron demostrando incapacidad para dialogar, negociar y aceptar la posibilidad de perder o ganar, propias de la apuesta política. El aferramiento a la potencialidad del peronismo como movimiento nacional popular impidió valorar adecuadamente el peso de las corrientes contrarias y sus acuerdos previos y posteriores con el general Perón. Tampoco se supieron decodificar las señales que indicaban una pérdida de apoyo de Perón, desde el momento mismo de su retorno y los acontecimientos de Ezeiza, en junio de 1973, o bien se intentaba remontar el hecho a partir de actos de fuerza,

como el asesinato de Rucci en septiembre de 1973, lo que descolocó aún más a las organizaciones. La separación creciente del gobierno, nacido de un amplísimo consenso, fue generando aislamiento político que se enfrentó con una mayor radicalización, lo que agravó el problema en lugar de atenuarlo. La confianza en el potencial “político” de las armas, proveniente de la antigua visión foquista y reforzada luego por Perón, por el movimiento, por el aplauso de vastos sectores sociales, por el rápido ascenso de su protagonismo político en la coyuntura electoral, los llevó a pensar que las armas los sacarían de este nuevo atolladero. Apostaron a ellas y perdieron la batalla política dentro del peronismo. La distancia y la ruptura de hecho con el movimiento fue sólo el primer paso de su aniquilación, iniciada desde el propio gobierno peronista. La consigna de la eliminación fue previa al golpe militar de 1976 y provino de sectores del peronismo ligados con personal de las fuerzas de seguridad, que formaron la AAA desde fines de 1973, antes de la muerte de Perón.

Las organizaciones guerrilleras no peronistas sencillamente no entraron al juego propiamente político y se mantuvieron en la lucha clandestina y violenta prácticamente sin interrupción, lo que las aisló del proceso y facilitó su temprano aniquilamiento. En enero de 1974, después del intento de copamiento de la guarnición militar de Azul por parte del ERP, Perón declaró que “aniquilar cuanto antes a ese terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana” (De Riz: 107). El mensaje, sin un destinatario directo, advertía a cualquiera que quisiera oír. La decisión estaba tomada: toda acción violenta se consideraría terrorista y el procedimiento a seguir sería su aniquilación. La muerte de Perón, poco después de la ruptura abierta con Montoneros el 1 de mayo de 1974, no hizo más que acelerar lo que ya se había puesto en marcha desde antes: la aniquilación, por cualquier vía, de los grupos armados y sus entornos. Por fin, el golpe de Estado de 1976, liberado de cualquier acuerdo político, incluso con la derecha del peronismo, convirtió en práctica de Estado la eliminación y desaparición no sólo de los grupos armados o radicales y sus entornos sino de toda disidencia.

6. Los movimientos armados de los años setenta no fueron terroristas; guerrilla urbana y terrorismo no son sinónimos. El terrorismo se caracteriza por tratar de generar terror social con el objeto de producir una parálisis tal que le permita imponer una determinada política. Para ello desata actos de violencia que debe ser indiscriminados, de manera que cualquiera pueda sentirse blanco de los mismos. El ataque a un enemigo militar es la figura de la guerra; el ataque a un enemigo de clase es la revolución, pero si ese “enemigo” es suficientemente difuso, la lucha en su contra puede alcanzar a cualquiera. Este es el instrumento privilegiado del terrorismo que, por lo mismo, se lanza de manera indiscriminada y hace blanco principalmente sobre población civil. Las organizaciones armadas argentinas no realizaron ataques de este tipo. Sus acciones se orientaban principalmente a obtener recursos económicos y militares, realizar propaganda armada mediante repartos de alimentos, medicinas y otros bienes, asesinar a miembros del aparato represivo, en particular involucrados en la represión y la tortura. Sobre todo en la primera época, previa a 1973, existía un especial cuidado en la planificación militar de las operaciones armadas, con el objeto de evitar cualquier daño sobre civiles. La

colocación de explosivos, por lo regular, se realizaba con fines de propaganda y cuidando que no hubiera víctimas. Las formas de la violencia recrudecieron a partir del enfrentamiento con la AAA y, ciertamente, se hicieron más indiscriminadas, pero siempre sobre personal represivo, aunque de rango y responsabilidad menores. Hubo operativos que, siendo contra miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en la represión, alcanzaron sin embargo a inocentes, como fue el caso de la hija del Almirante Lambruschini, pero existió sólo un par de operaciones militares –realizadas con posterioridad al golpe de 1976- que podrían considerarse francamente terroristas, ya que cobraron indiscriminadamente la vida de civiles. Creo que es importante hacer esta distinción porque considerar cualquier accionar armado como terrorista es una forma de desechar, sin más trámite, a la mayor parte de los procesos revolucionarios de la historia y a muchas de las formas de resistencia.

7. La derrota de las organizaciones armadas fue política primero y militar después, no a la inversa. La base de la derrota política fue la incapacidad de convertir la construcción del socialismo en una opción para la sociedad –en el caso de las organizaciones trotskistas- o en una corriente dentro del peronismo, bajo la versión del socialismo nacional proclamado por Montoneros –en el caso de las organizaciones peronistas-. Esta derrota se inscribió en una derrota continental de todo proyecto alternativo, armado o no, forzada por la intervención norteamericana. Así se arrasó desde el socialismo pacífico de los chilenos a la revolución triunfante sandinista. Sin embargo este hecho no debe impedir que se analicen las ineptitudes propias de cada proceso nacional. En el caso de las organizaciones armadas argentinas existió una gran incapacidad para pensar políticamente y luchar en ese terreno, cuando las condiciones no sólo lo permitían sino que lo exigían, en el contexto del gobierno peronista, que contaba con el apoyo electoral de más de 60% de la ciudadanía. La simpleza del análisis, la ingenuidad en la valoración de la figura de Perón y el peronismo, el error de evaluación de la relación de fuerzas a nivel nacional y dentro del peronismo fueron algunos de los factores que llevaron a dilapidar un apoyo y un capital político nada despreciables. El aislamiento político de la guerrilla fue promovido por la acción violenta de los grupos paramilitares, pero había sido propiciado antes por la incapacidad política de las organizaciones para lidiar en las arenas movedizas del peronismo sorteando y frenando la violencia. Podría decirse que primero ocurrió el aislamiento político, a causa del deslizamiento del foco político al militar en la disputa por la relación de fuerzas dentro del movimiento peronista. Desde ahí lo que se observa es una falta de política, es decir una “falta política”, que se potenció con la escalada represiva y que tuvo una importancia clave en el proceso de aniquilamiento.

8. La causa de la derrota no fue vincular lo político con lo militar sino reducir lo político a lo militar. Las organizaciones armadas perdieron el eje político en su relación con la sociedad, en la lucha dentro del movimiento peronista y en el debate interno. No fueron capaces de hacer de la consigna “socialismo nacional” una propuesta concreta y viable. No supieron reconocer su debilidad dentro del peronismo, una vez pasado el periodo electoral, para buscar alianzas que les permitieran eludir la confrontación y la provocación de una derecha feroz, acostumbrada a la violencia y cercana a Perón, es decir, no supieron defender el lugar que habían ga-

nado dentro del movimiento peronista. Tampoco fueron capaces de escuchar las voces de alerta desde dentro mismo de las organizaciones. Por el contrario, incrementaron su accionar militar –inaceptable en el contexto de un gobierno emanado de la voluntad popular- para tener presencia política, exaltaron su condición de grupo armado dentro de un movimiento de masas y disciplinaron el desacuerdo interno convirtiendo en enemigos a parte de sus propios compañeros, es decir, redujeron la política a su dimensión coercitiva, extraviándola.

9. La militarización interna llevó a reproducir el autoritarismo que se pretendía combatir. El énfasis creciente en lo militar llevó de la noción de una fuerza político militar irregular a la idea de constituir un Ejército y un Partido, institucionales, jerárquicos, disciplinados, a imagen y semejanza del Estado, siempre el Estado. Se podría decir que ocurrió un deslizamiento de pelear contra el Estado a convertirse en un émulo del mismo para reemplazarlo. Aunque un émulo grotesco, dada la debilidad comparativa, predominaba una lógica estatal, impositiva, disciplinaria. Para colmo, las supuestas condiciones de guerra, declaradas tanto por la guerrilla como por las Fuerzas Armadas, fueron la justificación de la toma de decisiones verticales y la implantación de una conducción vitalicia -que sólo se relevaba por la muerte de sus miembros-, sin valoración alguna de los errores políticos constantes y sucesivos, que no han reconocido ni siquiera a la fecha. El énfasis en la lucha armada había enquistado en las conducciones a los que sobresalían por sus virtudes guerreras que, como se vio en la reflexión de Debray, se esperaba que desarrollaran virtudes políticas semejantes, pero esto no ocurrió. De manera que las limitaciones políticas de la mayor parte de los miembros de la conducción, su condición de vitalicia y el disciplinamiento de todo desacuerdo –que ciertamente existía- impidieron una selección más adecuada para el liderazgo de los tiempos difíciles. Cabe señalar que este proceso es similar al que se reporta en muchos otros grupos armados latinoamericanos, por lo que habría que revisar si la asociación entre lo militar y lo autoritario es o no insoluble y bajo qué circunstancias.

10. En lugar de utilizar el recurso de las armas como instrumento para detener la violencia estatal, los grupos guerrilleros alimentaron la espiral de violencia hasta que ésta terminó por destruirlos. Pretender que la violencia es algo ajeno a la política parece ser una afirmación por lo menos discutible. No se trata de la bondad o maldad de la violencia sino de su presencia de hecho en las relaciones de poder y dominación. Sin embargo, hay distintos vínculos con ella. Una primera distinción que se podría hacer entre la violencia estatal y la que podríamos llamar resistente consiste en que la primera pretende mantener un monopolio de la fuerza para incrementar más y más su uso efectivo o potencial; por eso el Estado se arma y se informa de manera interminable. Por el contrario, la violencia resistente se usa para cortar el monopolio de la violencia como una forma de reducirlo pero no para apropiárselo sino para restringir toda violencia, para abrir las otras vías de la política, como el discurso y la comunicación. En la violencia resistente hay un “forzaje”, pero es un “forzaje” para abrir el diálogo y el acuerdo. Los grupos armados argentinos no supieron hacer esto y ante cada situación de violencia “forzaron” pero no hacia la desactivación del uso de la fuerza sino hacia un incremento del mismo. Tampoco supieron retirarse de los espacios perdidos y permanecieron en ellos exponiéndose

de manera prácticamente suicida. La “espiral de violencia”, como una especie de tornado, se traga primero y antes que nada al más débil. Entre la insurgencia y el Estado, puestos a desafiarse en el terreno de la fuerza, gana el Estado. Sólo hay un lugar desde el que la insurgencia puede triunfar y éste es la lucha política. Los cubanos no le ganaron a Batista por su potencial militar, le ganaron políticamente. Si la insurgencia usa la violencia para abrir una lucha política cancelada (como ocurría durante la Revolución Argentina) y luego gana la lucha política tiene posibilidades; en caso contrario, su derrota es un hecho.

Marcas de la violencia

Transitar del análisis de las formas violentas de la política a las actuales no es asunto sencillo. Creo que hay que empezar por hacer distinciones. El proceso vivido entre 1976 y 1983 tuvo peculiaridades que lo diferencian de cualquier otro en la historia argentina, antes y después. Cerró una etapa (la de protagonismo de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de la visión guerrera de la política) pero también abrió otra (la de una sociedad fragmentada y fuertemente marcada por la penetración neoliberal-global). Quiere decir que el periodo posterior reconoce rupturas y continuidades con respecto a los años de la dictadura; lo nuevo y lo viejo se superponen.

¿Qué inició en los años setenta, qué es lo nuevo a partir de entonces? La actual reorganización de la hegemonía planetaria, como hegemonía global. La implantación del nuevo modelo económico neoliberal y la reducción de las funciones económicas y sociales del Estado para dar completa libertad de movimiento al mercado se iniciaron en la periferia. Primero fue Pinochet y luego Reagan, pero el modelo se había ideado no en Santiago de Chile sino en Chicago. Uno de los rasgos sobresalientes de esta reorganización es el desplazamiento de la centralidad del Estado.

Las guerras sucias fueron el recurso para impedir políticas alternativas que cerraran el paso al nuevo modelo de acumulación, vital para la preservación del sistema. Impusieron por la fuerza, en las naciones latinoamericanas, lo que a partir de entonces han seguido imponiendo en el mundo entero. En este sentido, no en otros, Menem no fue algo nuevo sino la consumación de la política de las Juntas.

Hay que entender el desconcierto de los militares ante el hecho de ser juzgados después de haber triunfado militar y políticamente. Lo paradójico del asunto recuerda a aquella recomen-

dación que hacía Maquiavelo al Príncipe en el sentido de que, cuando alguno de sus subordinados cometiera actos crueles en su nombre, se deshiciera luego de él, usando un castigo ejemplar. De esa manera el beneficio resultaría doble: haber logrado la ejecución de la violencia y desentenderse de su responsabilidad. Aquí ha pasado algo similar. La mayoría de las actuales “democracias” promovidas por Estados Unidos navegan sobre aquella sangre desentendiéndose del costo.

De la misma manera que se ha impuesto un modelo único para las economías, diseñado y monitoreado por los organismos globales, se ha impuesto un modelo político basado en democracias “abiertas”, es decir dóciles. Pero las democracias que se promueven y la mayor parte de las que existen en América Latina luego de la “transición” alentada por los países centrales no son más que nuevas formas de oligarquía, en el sentido más estricto del término; es decir, gobierno de los ricos para los ricos.

Eduardo Saxe Fernández define de la siguiente manera a lo que llama las nuevas repúblicas oligárquicas latinoamericanas:

En lo económico las caracteriza por estar orientadas al mercado externo, beneficiar al capital corporativo transnacional, subordinarse a las agencias financieras internacionales y tener una redistribución regresiva del ingreso que incrementa la polarización, de por sí alarmante, del continente.

En lo social, por incrementar todas las formas de exclusión, como efecto de la redistribución regresiva y de la privatización de lo público, mediante corporaciones, realizando una verdadera expropiación social en beneficio de los grandes capitalistas. La exclusión de la cultura y la educación facilita la manipulación y la escasa participación política. A su vez, incrementa la violencia social, como violencia estructural, que se “conceptualiza” como delincuencia.

En lo político, el autodesmantelamiento del Estado, además de una transferencia de recursos efectúa una desaparición de lo público. Los administradores del aparato estatal se convierten en garantes de los negocios y hacen sus propios negocios. El tráfico de influencias y la corrupción dejan de ser una disfunción para convertirse en variables estructurales. Las elecciones se convierten en procesos mediáticos, que presentan opciones restringidas a quienes acceden a él -siempre ricos- para legitimar relativamente a los gobernantes.

Aunque hay intentos importantes por separarse de este modelo, y creo que el gobierno del Presidente Kirchner es uno de ellos, estas democracias oligárquicas son las que se promueven

y felicitan y son las que probó Argentina después de la dictadura militar. Corporativas y privatizadoras son contrarias al principio ciudadano que, supuestamente, organizaría estos nuevos tiempos. Se contraponen con lo público y no son estadocéntricas, en la medida en que el Estado deja de constituir un principio de universalidad para convertirse en instrumento de la oligarquía gobernante y sus negocios. Si hay una palabra que las define, esa palabra es mercado.

Pese a todo ello, se podría decir que representan una ganancia: no hay violencia. En efecto, las sociedades latinoamericanas parecen hoy relativamente pacificadas. Sin embargo, valdría la pena hacer algunas precisiones: 1) La pacificación política de las actuales “democracias” se asienta en la violencia sin precedentes de las dictaduras. 2) La aplicación del modelo neoliberal implica una violencia sorda que se expresa como exclusión social. 3) Una de las formas más violentas de la exclusión, en nuestras sociedades, es la construcción de la delincuencia como alternativa de vida para los marginados, que obliga a cada vez mayor número de personas a subsistir en la más completa inseguridad y sometida a la violencia brutal de corporaciones públicas y privadas. 4) El ataque a la delincuencia mediante el incremento de las penas, genera un crecimiento aceleradísimo de la población carcelaria, en su mayoría perteneciente a los sectores socialmente marginados, lo que hace que el número de personas sometidas a encierro en las sociedades “democráticas” se multiplique de manera veloz y constante.

El actual orden global ha declarado dos enemigos: el delincuente y el terrorista, que por otro lado se suelen asimilar uno al otro. Sobre ellos el Estado deja caer toda su violencia abierta, no potencial, no simbólica sino estrictamente física y destructora. Baste revisar los nuevos sistemas penitenciarios, en particular las prisiones de alta seguridad, para comprender que se trata de maquinarias de destrucción y depósito de sujetos desechados socialmente. Este tipo de cárceles se multiplican rápidamente en toda América Latina.

El tratamiento de los terroristas es aún más atroz. El campo de concentración de Guantánamo no tiene nada que envidiar a cualquiera de las instituciones de concentración-exterminio del siglo XX y está allí para recordarnos que, en plena “democracia”, no se abandonan esas prácticas. Si el delincuente entra en un mundo regido no por la ley, sino por las corporaciones ilegales, el terrorista entra en un mundo fuera del mundo, del derecho y hasta de cualquier existencia. Ni siquiera se sabe quiénes están internados en Guantánamo ni en qué otros lugares funcionan instituciones semejantes, aunque sabemos que existen.

Pero tal vez uno de los signos más alarmantes de nuestro tiempo es que, dadas estas condiciones, “naturalmente” aceptadas por la mayor parte de los países del orbe, se insista ahora en caracterizar como terrorista cualquier forma de oposición violenta a un Estado que es, el mismo, tan extraordinariamente violento. De manera que Al Qaeda, los grupos nacionalistas palestinos, la guerrilla colombiana e incluso algunos grupos altermundistas, se definen como terroristas (es decir fuera de todo derecho), sin diferenciación alguna. Incluso los medios de

comunicación, con su habitual ligereza en la caracterización de los fenómenos, no vacilan en calificar de terrorista cualquier acción violenta de las organizaciones sociales, como el corte de vías de acceso o el sabotaje. Es sorprendente también la facilidad con que sectores de la sociedad civil “delincuencializan” la protesta social.

En un discurso fácil, se afirma que en el mundo actual se ha pasado del modelo del revolucionario violento y alucinado al del ciudadano pacífico que dialoga. Se desecha de un plumazo la violencia de la política como inadecuada. Pero resulta que la violencia está allí, en la política estatal, más clara y nítida que nunca, como guerra a nivel internacional, como represión a nivel de las naciones. En consecuencia, parecería ser que la asimilación de toda violencia social con la delincuencia y de toda violencia resistente con el terrorismo no es más que una forma de desechar e invalidar aquellas formas de violencia que no provienen del Estado, garantizando y legitimando las que emanan de él, como puro orden y aplicación del derecho vigente.

Tal vez esta condena radical a cualquier forma de violencia resistente, la casi prohibición de hablar de ella, sea parte de una memoria, que se dispara a partir de las marcas terribles que dejó en nuestra sociedad, una memoria del poder, de su impunidad, del miedo, que reaparece en la prohibición absoluta de cualquier práctica que cuestione el derecho monopólico del Estado a ejercerla.

No pretendo, de ninguna manera, hacer un llamado a las prácticas violentas. Todo lo contrario, y menos aún en el caso específico de Argentina, que ensaya hoy nuevas alternativas políticas. La experiencia que he tratado de analizar y criticar de la lucha armada en Argentina muestra los terribles costos que esa opción tuvo, y que se nos hacen aún más presentes frente a los restos de nuestros muertos.

Sin embargo, eso no puede llevarnos a desconocer el componente violento de la política global y de las resistencias que se le oponen, nos guste o no. Tal vez lo que la experiencia pueda enseñarnos es que cualquier violencia resistente debe tener como objetivo desacelerar y, si es posible, detener la violencia en lugar de potenciarla; se dice fácil, como principio, pero no parece ser tan fácil de manejar. Sin embargo, los nuevos movimientos altermundistas y, entre ellos el zapatismo, intentan explorar este camino como una posibilidad verdaderamente incierta. También intentan renovar la política con la mirada puesta más allá o más acá del Estado, pero no en él. Y parte de esta renovación comprende el restablecimiento de los vínculos entre ética y política que la modernidad erosionó, y que nos recuerdan otras formas de poder, de no poder y de no querer poder. Conjugarse el “forzaje”, el discurso, el diálogo, el juego y la comunicación en una apuesta fuerte, que reivindique la acción política en el sentido de lo común, y que no se mire en el espejo del Estado podría ser parte de la apertura a lo completamente nuevo haciendo memoria desde las marcas del pasado.

Bibliografía

Actis, Munú, Cristina Aldini, et al., Ese infierno, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2001.

Arendt, Hannah, La condición humana, Buenos Aires, Paidós, 1993.

Benjamín, Walter, Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Madrid, Taurus, 1991.

Berlanga, José Luis, La creatividad política en Hannah Arendt, tesis de maestría, BUAP, 2005.

Carnovale, Vera, "El concepto del enemigo en el PRT-ERP", Lucha armada, Buenos Aires, año 1, núm. 1, 2005.

Debray, Régis, "¿Revolución en la revolución?", Lucha armada, Buenos Aires, año 1, núm. 1, 2005.

De Riz, Liliana, Retorno y derrumbe, el ultimo gobierno peronista, México, Folios, 1981.

Guglielmucci, Ana, "Reseña de Mujeres guerrilleras", Lucha armada, Buenos Aires, año 1, núm. 1, 2005.

Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Editorial Crítica, 2001.

Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

Saxe Fernández, Eduardo, La nueva oligarquía latinoamericana, San José de Costa Rica, Euna, 1999.

Revista Lucha Armada, Año 2 - Número 4 – 2006

www.luchaarmada.com.ar